

Auto No. AI-043
Proceso: Verbal
Demandante: Luz Elena Arango Arias y otros
Demandados: Mitsubishi Electronic de Colombia Ltda y Otros
Radicado: 05001 31 03 006 2018 00344 03.
Decisión: Revoca parcialmente auto apelado.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, veintisiete (27) de junio del dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante y las codemandadas SBS SEGUROS COLOMBIA, EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN, SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR Y CUMMINS DE LOS ANDES S.A, frente a la decisión adoptada el pasado 03 de febrero del año en curso, por medio del cual Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín resolvió lo atinente al decreto de pruebas clamadas por las partes, de manera concreta, la negativa en torno a la contradicción del Dictamen Pericial, Exhibición de Documentos, Prueba por informe y Testimonial, las que se abordarán atendiendo a los reparos concretos que formuló cada recurrente en torno a su negación y posteriormente se analizará su procedencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia previamente referenciada, el Juzgado en cita, prosiguiendo con las etapas inherentes al trámite jurisdiccional, se aprestó al decreto de las pruebas que harían parte del acervo de igual naturaleza dentro del presente proceso, auto en el cual el juzgado de origen negó los siguientes medios probatorios, básicamente con apego en las argumentaciones que a continuación se sintetizan, los que para un mejor proveer se compilarán atendiendo a la naturaleza del medio de convicción.

(A). DICTAMEN PERICIAL

En su debida oportunidad procesal las demandantes, así como los codemandados SBS SEGUROS COLOMBIA S.A, y EPM, apelaron el auto en cita, por las razones que se exponen a continuación:

1.1 Demandante: Con el fin de contradecir el dictamen pericial rendido por el señor Carlos Emilio Gutiérrez, acompañado por la sociedad Mitsubishi en donde se pone en conocimiento el funcionamiento de los ascensores de la compañía, solicitó el apoderado que se autorizara la incorporación de una experticia técnica para valorar aspectos relacionados con temas técnico/mecánicos de los ascensores, conforme a lo previsto en el artículo 228 del C.G.P.

1.2 Decisión del Juez: Prueba que fue denegada, bajo el argumento que: *“la parte demandante aportó con la demanda un dictamen pericial expedido por el doctor Jaime y que se solicitó y decretó como medio de prueba de dictamen pericial que se refiere a posibles circunstancias que incidirían en la condición de salud de la señora Luz, para efectos de una eventual declaratoria de pérdida de capacidad laboral, también encuentra este funcionario judicial que como el dictamen que hubiese sido aportado por una de las entidades codemandadas y que habría realizado el doctor Carlos Gutiérrez tiene relación con esta misma circunstancia, entonces si bien el artículo 227 y 228 permiten la contradicción con otro dictamen también debe tenerse en cuenta que las reglas sobre dictámenes periciales establecidas a partir del artículo 226 determinan que sobre ciertos hechos específicos objeto de discusión solo puede obrar en el trámite procesal un dictamen pericial por cada parte que presente discusión fáctica y/o jurídica sobre esos hechos específicos”*.

1.3. Recurso de Reposición y en subsidio Apelación: El recurrente describe como argumento central del recurso que el titular del estrado judicial decidió no decretar el peritaje, porque se confundió con las experticias que fueron acompañadas al interior del proceso por parte de la Sociedad Mitsubishi S.A.S, quien, presentó dos estudios técnicos, uno relacionado con *“la entidad y el efecto de los antecedentes médicos y la enfermedad de la señora Arango”* y otro alusivo al *“funcionamiento del ascensor, con el fin de establecer que no ocurrió falla alguna en el evento que narra la demanda”*, por considerar que como ya obraba en la demanda un dictamen pericial, entonces, no podía acompañar otro medio probatorio de igual naturaleza. Afirmación que no es cierta, porque, la prueba pericial que está en el libelo introductorio es un dictamen de pérdida de capacidad laboral con el que se pretende probar el estado de salud de la demandante y sus causas, y no aspectos relacionados con el funcionamiento de los ascensores, motivo por el que pretende la revocatoria de la decisión, para que, en su lugar, se conceda el decreto de dicho medio probatorio.

2.1. Aseguradora SBS SEGUROS S.A. –llamada en garantía por el Edificio el Ciruelo P.H- En el momento de contestar la demanda, solicitó un término prudencial para aportar un dictamen de valoración médica para establecer el nexo causal entre las

lesiones sufridas por la demandante y el accidente ocurrido el 8 de marzo del 2009, atendiendo a lo descrito en el artículo 227 del C.G.P.

2.2. Decisión del Juez: *“Para efectos sobre la información de las condiciones médicas o de salud de la señora Luz Elena, tanto para la época del presunto accidente como con anterioridad o posterioridad del mismo, obran en el plenario no solo suficiente medios de prueba documental –historia clínica–, sino que además se han decretado medios de prueba testimonial que habrán de deponer sobre él, y además obran en el plenario ya dos solicitudes de dictamen periciales uno por la parte demandante y parte demandadas en los que se hace pronunciamiento en relación con las condiciones de salud y las posibles condiciones de pérdida de capacidad laboral de la señora luz Elena con ocasión de los hechos materia de litigio, por lo tanto, deviene innecesario un nuevo dictamen pericial para el mismo propósito por otras de las partes intervinientes que además ya ha efectuado diversas solicitudes probatorias para efectos de esclarecimiento de aspectos en este sentido y que adicionalmente implicaría que tuviere que disponerse que la señora luz Elena compareciera ante algún otro tipo de personal médico para efecto de nuevas revisiones a esta altura de tiempo para hacer manifestaciones sobre sus circunstancias de salud que pueden estar claramente establecidas con los medios de prueba documental, pericial y testimonial que se tienen en el proceso o que se van a recaudar”.*

2.3. Recurso de Apelación: Advierte el recurrente que los argumentos que expuso el juez para denegar el decreto de la prueba técnica cercena las oportunidades probatorias y la igualdad procesal de las partes, aunado al desconocimiento de las normas adjetivas que rige la procedencia de la admisibilidad de la experticia técnica, porque *“da por sentado que cualquier estrategia de contradicción al dictamen aportado por los demandantes se encuentre suplida con la presencia del dictamen aportado por Mitsubishi”, lo que denota un desconocimiento del artículo 226 del C.G.P que permite que cada parte individualmente considerada pueda aportar un dictamen sobre un mismo hecho o materia, “que es lo que en parte persigue y por el contrario el juez sujeta a mi representada a un dictamen frente al cual puede tener otras consideraciones o que pueden interpretar que no agota en su totalidad la contradicción al dictamen de la parte demandante”*

3.1 Empresas Públicas de Medellín: En el momento de formular las excepciones de mérito, solicitó la apoderada que se ordenara el decreto de un dictamen pericial ante la Junta de Calificación Regional de Invalidez de Antioquia, para que certificara la fecha de estructuración de la invalidez de la señora Luz Elena, el grado de afectación y el porcentaje atribuible al accidente, así como todos los tratamientos descritos en la historia clínica, para determinar si aquellos se originaron como consecuencia del accidente o de enfermedades preexistentes.

3.2. Decisión del Juez: *“Que de acuerdo con la normatividad en materia laboral más reciente ya se ha dispuesto y ha sido objeto de análisis y pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia sala de casación laboral que no es necesario, indispensable u obligatorio para efectos de la determinación de la calificación de pérdida de capacidad laboral de una persona que el dictamen o evaluación que en este sentido se pueda realizar, sea efectuado única o exclusivamente por el personal médico de las juntas regionales de calificación de invalidez o de la junta nacional de calificación de invalidez, en este mismo sentido existen reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Civil que para efectos en materia probatoria dentro de los procesos civiles donde se haga algún tipo de discusión sobre posibles circunstancias de pérdida de capacidad laboral de una persona no es ni necesario ni obligatorio ni indispensable que se tenga que hacer esa verificación única o exclusivamente por el personal médico vinculado a las juntas regionales de calificación, estas evaluaciones de las juntas son obligatorias cuando se hacen a través de las entidades de seguridad social y para efectos pensionales dependiendo del tipo de reclamación pensional que se realice ante las entidades”. En consecuencia, estimó que como en el expediente obran por lo menos dos dictámenes periciales en los que se haría pronunciamiento sobre las condiciones de salud de la señora Luz Elena y sobre la posible pérdida de su capacidad laboral, redundante innecesario e impertinente ordenar su decreto, ante la existencia de medios probatorios en los que se puede extraer tal información.*

3.3 Recurso de Apelación. Aduce la apoderada de EPM que no comparte los argumentos que arguye el *A quo* para denegar el decreto de la prueba porque: (i) el hecho de que no pueda realizarse el dictamen por parte de la Junta de Calificación no obsta para que el “juez probo” pueda ordenar a otra institución que se lleve a cabo su práctica (ii) La existencia de otros documentos técnicos, no implica que no pueda ser objeto de contradicción con otro examen, máxime cuando el fin perseguido es acreditar las múltiples preexistencias que tiene la señora Luz Elena y así determinar la causa de su incapacidad laboral en la eventual condena.

(B) EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS:

1.1. Supuestos fácticos relevantes: Solicitó el libelista en su escrito de traslado de las excepciones de Mérito la exhibición de los documentos por parte de Mitsubishi relacionados con:“(i) El registro mencionado en el apartado 16.2 del Reglamento UNE-EN 81-2-2001, que incluye (además de las copias de los exámenes de inspección mensuales y los que deben tener lugar después de accidentes o modificaciones) las inspecciones, ensayos y verificaciones previas a la puesta en funcionamiento del ascensor, específicamente de (a) el paracaídas, (b) las instalaciones eléctricas, (c) los amortiguadores, (d) los dispositivos eléctricos de seguridad, (e) los dispositivos de suspensión y sus amarres, (ii) manual de operación de los ascensores instalados en el P.H el Ciruelo (iii) informes o fichas

de mantenimiento de los ascensores instalados correspondientes a los años 2008 y 2009 y (iv) así como la información contenida en el registrador de datos (datalogger) del ascensor durante los años 2008, 2009 y 2010), y por parte de la Propiedad Horizontal que exhibiera: “(i) informes o fichas de mantenimiento de los ascensores instalados en el P.H en los años 2008 y 2009 (ii) todas las reclamaciones presentadas por los habitantes, usuarios, y demás terceros relativas al funcionamiento de los ascensores ubicados en la P.H el ciruelo”.

1.2. Determinación del Juez: “Dada las contestaciones a las demandas que se presentaron por la sociedad Mitsubishi y por la propiedad horizontal el ciruelo y de los llamamientos en garantía que se han realizado en los diferentes intervinientes procesales, se encuentran que los documentos que la parte demandante está solicitando como objeto de exhibición fueron aportados por los diferentes intervinientes procesales,” precisando que en el caso de la Propiedad horizontal “han aportado los documentos técnicos de mantenimiento de los ascensores de la propiedad horizontal y en especial los relacionados con las atenciones técnicas que se habrían realizado por las diferentes entidades para el año 2009 –época de discusión de los hechos materia de litigio- y por lo tanto no es procedente porque ya obra en el plenario. En relación con las reclamaciones que hubieren realizado terceras personas diferentes a las partes del litigio tanto para el año 2008 y 2009 no tiene relación directa con el objeto de debate porque aquí no se están discutiendo posibles reclamaciones de terceros para efectos de algún derecho o reconocimiento por parte de los intervinientes”

1.3. Recurso de Reposición y en subsidio Apelación: Presentó el apoderado del demandante dos reparos concretos frente a la anterior determinación:

(i) los documentos no fueron debidamente aportados: En el expediente no obran todos los documentos que fueron solicitados a la Propiedad Horizontal porque solo están parcialmente las constancias de mantenimiento de los ascensores para enero del año 2009 excluyendo la del mes de marzo, y los otros legajos relacionados con el manual de mantenimiento vigente para la época, el registro de datalogger del ascensor y los reportes de los accidentes. Aunado a que la foliatura que obra en el proceso tienen apartados que son imposibles de leer, tal y como se advierte en el reporte de mantenimiento del 17 de abril de 2009.

(ii) los documentos relativos a reclamaciones anteriores y de terceros al litigio si son pertinentes, porque la información que se recaude al respecto, puede considerarse como una prueba indiciaria para probar el funcionamiento anormal del ascensor antes y después del accidente. “las reglas de la experiencia a partir de ese conocimiento permiten deducir que el ascensor también pudo funcionar mal el 8 de marzo de 2009 y que ese era un evento previsible y resistible por las entidades codemandadas”, lo cual resulta relevante para el proceso.

Finalmente advirtió que el hecho de que haya otros medios probatorios para averiguar por la existencia o inexistencia de algún documento no debe excluir la posibilidad de su exhibición porque las consecuencias procesales son totalmente divergentes.

(C) INCORPORACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL:

1.1. Supuestos Fácticos Relevantes: El demandante al momento de traslado de las excepciones de mérito de Cumminis de los Andes, allegó como medios de prueba adicional, la historia clínica de la señora Luz Elena para que fuera incorporada al proceso como material probatorio.

1.2. Inclusión frente a la que el Juez resolvió: *“Esta solicitud probatoria resulta repetitiva y no se accederá a ella porque ya se accedió a las historias clínicas que fueron aportadas por la parte demandante con la demanda y con el texto de la reforma”.*

1.3. Recurso de Apelación: Cuestiona el apoderado la anterior determinación, en cuanto que de las respuestas que presentó Cumminis de los Andes, se aprecia que sí se discutió el estado de salud de la señora Arango, tal y como se advierte en los presupuestos de responsabilidad civil extracontractual, en los que repara los antecedentes médicos de la demandante para eximir la responsabilidad y, en tal sentido, como el artículo 370 del C.G.P concede una nueva oportunidad probatoria a su favor, resulta plausible su decreto, sin que importe que otros codemandados hayan o no presentado iguales excepciones.

(D) PRUEBA POR INFORME:

1.1. Supuestos Fácticos Relevantes: Seguros Comerciales Bolívar -llamante en garantía-, solicitó que se oficiara a la Universidad Pontificia Bolivariana para que a través de su área de gestión humana certificara: las incapacidades que fueran emitidas y aportadas en favor de la demandante entre el periodo 2009 a 2011, así como el motivo de su generación.

1.2. Decisión del Juez: *“Como en este litigio se dispuso la convocatoria de la jefa de gestión humana del Instituto Educativo que habría emitido una certificación laboral en la que haría referencia a estas circunstancias que son objeto de esta solicitud probatoria, por lo tanto deviene innecesario disponer el decreto de prueba por informe para que se informe de manera escrita sobre estas circunstancias (...) porque la parte solicitante, como puede interrogar a quien habrá de comparecer a efectos para que declare sobre el documento allegado al proceso, puede cuestionar sobre dichas circunstancias, además de que el*

despacho judicial puede hacer uso de preguntas sobre estos aspectos de manera oficiosa a la persona que va a comparecer para este propósito y por ende deviene innecesario dicho medio probatorio”.

1.3. Recurso de Apelación: Advierte el apoderado de la entidad llamada en garantía que el disenso con la anterior determinación recae en que no es posible afirmar que por medio de la prueba de ratificación de documentos sea posible agotar el objeto de la prueba por informe, porque se trata de dos medios de prueba diferentes. En la certificación solicitada se busca conocer las incapacidades emitidas y en la ratificación que se surtirá en el proceso, recae exclusivamente sobre aspectos relacionados con el tipo de contrato de la trabajadora, periodo de duración y remuneración, objeto que es totalmente diferente al pretendido en la prueba por informe.

(E). TESTIMONIO:

1.1. Supuestos Fácticos Relevantes: Solicitó la codemandada Cumini de los Andes en el escrito de las excepciones de mérito la recepción del testimonio del señor Yesid Roncancio Fuerte, sin especificar el móvil de su intervención, ni tampoco los datos de su identificación y ubicación.

1.2 Decisión: Luego de aclarar la improcedencia del interrogatorio en sobre cerrado frente a los testigos, determinó que *“no se especifica en la solicitud probatoria cuál sería el objeto de prueba concreto de la declaración del señor Yesid Roncancio, además que tampoco se indican datos de identificación, ubicación física o electrónica”*, solicitud denegada por cuanto no cumple los requisitos del artículo 212 del C.G.P.

1.3 Recurso de Reposición y en subsidio Apelación: Arguye el apoderado de la Sociedad Codemandada, que el artículo 168 del C.G.P. no establece como causal de rechazo de un medio probatorio el no cumplimiento de alguno de los requisitos señalados en el artículo 212 del C.G.P. y, por el contrario, el excesivo ritualismo del juez condujo a la violación flagrante de los preceptos constitucionales y legales, ello por cuanto desconoció que el objeto del testimonio recaía en explicar las actividades técnicas que ejecutó la sociedad durante el año 2009 en la planta eléctrica de la propiedad horizontal, tal y como se advirtió en la contestación de la demanda.

Atendiendo a los anteriores puntos, concedió el recurso de apelación, el que ahora corresponde desatar al Tribunal, con apego en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que el recurso vertical interpuesto recae sobre varios medios probatorios y a su vez fue formulado por diferentes partes en el proceso, su análisis se abordará frente a cada una de las decisiones objeto de reclamo, advirtiéndose desde ya la procedibilidad del recurso de apelación conforme a lo previsto en numeral 3 del artículo 321 del C.G.P., mismo que procede contra el auto “... que niegue el decreto o la práctica de pruebas”.

1. DEL DICTAMEN PERICIAL: Iniciemos precisando que de la lectura del artículo 226 del Código General del Proceso se desprende inconcusamente unos requisitos formales, taxativos y de obligatorio cumplimiento que deben cumplir las partes al momento de la solicitud de una prueba pericial, requisitos que van dirigidos a explicar los métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, la calidad del profesional que lo rinde, idoneidad y experiencia en la materia objeto de análisis.

A su vez, el artículo 277 *ibídem*, establece la oportunidad para presentar el dictamen pericial, que en el caso del actor puede hacerlo en su demanda (art 82) o en el término para solicitar las pruebas adicionales (art 370); mientras que el demandado puede hacerlo con su contestación (art 96) o, en cualquiera de ellos dentro del plazo especial que prevé la norma en cita. Por su parte, la contradicción del dictamen se realizará en virtud de lo establecido en el artículo 228 del C.G.P, esto es, la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones, petición que deberá elevar dentro de los tres (03) días siguientes a la notificación de la providencia que la ponga en conocimiento, a fin de que si el juez lo considera necesario, entonces, citará al perito a la respectiva audiencia, caso en el cual la contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá interrogarlo mediante la formulación de preguntas asertivas e insinuantes.

1.1. Caso Concreto. Bien, lo primero que es importante señalar es que el administrador de justicia no puede rehusarse a recibir la información probatoria que los extremos procesales suministren dentro de las oportunidades previstas en el ordenamiento jurídico, salvo cuando expresamente alguna norma se lo permita, como quiera que lo contrario significaría violar el derecho fundamental a la prueba. Parámetros que deben

estudiarse con miramiento en el artículo 168 ibídem, esto es, que se trate de un medio de prueba que sea lícita, pertinente, conducente y útil para el proceso.

Justamente, atendiendo a cada uno de los reparos que formularon las partes procesales que integran la Litis, así como las razones que expuso el Juez *A quo* para denegar su decreto, advierte esta Sala de Decisión que frente algunos de los sujetos procesales sí resulta plausible acceder a la contradicción del dictamen por medio de otro trabajo pericial, por cuanto se cumplen los requisitos enlistados en el citado precepto 226 del C.G.P y la procedencia del medio probatorio atendiendo a lo dispuesto en el artículo 168 ejusdem, veamos:

1.1.1. Contradicción del Dictamen Pericial por el demandante: Como puede verse, dentro del plenario se advierte la procedencia del elemento suasorio, en los términos en los que reclama el apoderado de las demandantes porque efectivamente el juez pasó por alto que se trata de una experticia técnica totalmente diferente a la que aportó en el momento de presentar la demanda, misma que tiene por finalidad la *-determinación de la pérdida de la capacidad laboral de la señora Luz Elena Arango Arias, rendido por la Universidad CES a través del Doctor Jaime Ignacio Mejía Peláez (001CopiaExpedienteFisico, pág 273);* mientras que la experticia ahora pretendida por el recurrente tiene como fin principal contradecir el estudio técnico realizado por el perito Camilo Emilio Gutiérrez sobre el funcionamiento del ascensor (030 Contestación Reforma, pag28).

Supuestos que en ningún momento desconoce el límite previsto en el artículo 226 del C.G.P *“Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial”,* porque la facultad de acompañar otra experticia técnica no puede limitarse a la calidad de la parte *-como erradamente lo advirtió el juez-*, sino al objeto en que recae el medio probatorio, desavenencia que no estructura una causal para excluir tal prueba, por lo que, en consecuencia, bajo tales derroteros deberá ser decretada por reunir los requisitos descritos en la norma adjetiva.

1.1.2. Contradicción de Dictamen por SBS SEGUROS. Frente a la experticia técnica solicitada por la Aseguradora SBS Seguros resulta diáfana su procedencia, pues el hecho de que existan otros medios probatorios al interior del proceso no implica -per se-, que la parte frente a la cual se aduce tal medio probatorio no pueda también a su vez

ejercer la contradicción mediante otro dictamen pericial, al tiempo que paralelamente puede contrainterrogar al perito que rindió el estudio técnico, máxime cuando el artículo 228 del C.G.P en ningún momento delimita la viabilidad de uno u otro canal de convencimiento, pues, por el contrario, permite que se surtan ambas actuaciones.

Ciertamente, las razones que esgrimió el juez para denegar dicho elemento suasorio no resulta de recibo, porque, en primer lugar, la llamada en Garantía lo enunció dentro de la oportunidad procesal prevista para ello *-en la contestación del llamamiento y en la de la demanda-* y posteriormente, al tiempo que acompañó el dictamen pericial rendido por la Universidad CES a través del doctor José Jaime Acosta- (Cdo 001CopiaExpedienteFísicopag758), último aspecto que tampoco valoró el juez, porque llanamente como argumento adicional para denegar la prueba se preocupó por *“la comparecencia de la señora Luz Elena a otro tipo de personal médico para efecto de nuevas revisiones”*; afirmación que no resulta acorde con los documentos obrantes en el plenario, que en este caso se materializa, en la ya incorporación del estudio descrito.

Así las cosas, como los medios probatorios se presentaron atendiendo a los lineamientos previamente descritos, aunado a que reúne los requisitos de conducencia y pertinencia de la prueba, resulta factible acceder a su decreto, por lo que en tal sentido, se revocará la decisión, para en su lugar ordenar su incorporación.

1.2. Dictamen Pericial por parte de EPM. Finalmente, frente a esta petición probatoria, bastará indicar que en los términos en que fue solicitado el estudio técnico no resulta plausible acceder a su decreto ante la falta de idoneidad del medio probatorio, aunado a la ausencia de cumplimiento de los requisitos formales para disponer su incorporación.

Obsérvese que el fin perseguido por la apoderada de EPM es que se determine a ciencia cierta las patologías que originaron la incapacidad laboral de la demandante, en el sentido que se esclarezca su grado de afectación no solamente por los traumas que sufrió como consecuencia del accidente el 8 de marzo del 2009, sino que también se pudo originar debido a las enfermedades preexistentes que tenía aquella -previo al acaecimiento de éste accidente, información que si bien puede resultar relevante para la tasación de la indemnización, lo cierto es que al momento de formular la petición probatoria no cumplió con los parámetros del artículo 227 del C.G.P, y so pretexto de

suplir dicho vacío solicitó que se oficiara a una institución especializada -como las Juntas de Calificación de Invalidez-, quienes únicamente se encuentran habilitadas para estudiar la pérdida de capacidad laboral cuando así lo requiera la parte afectada o en su defecto las entidades que pertenecen al sistema de seguridad social y frente aspectos relativos a sus prestaciones laborales.

2. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: De otro lado, en cuanto al otro punto de inconformidad, en lo que respecta la exhibición de documentos a cargo de los demandados, debe recordarse que el principal móvil de dicha herramienta probatoria es precisamente que los documentos que las partes no tengan en su poder se acompañen al proceso, en este caso por los demandados *-por ser aquellas personas que tienen el contacto directo con dicho medio probatorio-*, sin embargo, cuando en el acto procesal de la contestación de la demanda fueron aportados, ordenar su exhibición resulta inane, porque sencillamente aquellos ya son parte del proceso y su valoración se sujetará al principio de unidad de la prueba.

2.1. Caso Concreto. Bajo esta perspectiva, y atendiendo a los reclamos que fueron presentados por la parte demandante, deberá manifestar el Tribunal que no comparte la conclusión a la que llegó el Juez en Primera Instancia, pues, el auto que se recurre de manera holística señala que ya dichas pruebas obran en el plenario a la par con la contestación de la demanda, pero guarda silencio en señalar su ubicación, para al menos sembrar un halito de certeza de su afirmación, aunque, por el contrario, lo que se advierte es que esas pruebas no obran dentro del expediente digital que fue allegado a esta Corporación.

Y es que, de verdad, en los anexos a las excepciones de mérito no está la prueba documental sobre el registro de instalación del ascensor al momento de su puesta en servicio, como tampoco las condiciones de vigilancia y de mantenimiento de los ascensores de la propiedad horizontal en el año previo al accidente (2008), ni en el momento en que se causó el accidente (2009), como tampoco obra en el plenario el manual de operación de los ascensores, ni las fichas o los exámenes de inspección. Sólo parcialmente se encuentran los reportes de servicio de mantenimiento de ascensor que se surtieron en el año 2009 por parte de la empresa Mitsubishi Ltda

(001CopiaExpedienteFísico, pág158-191, 695-700¹)², cuya información en su mayoría resulta ilegible, tal y como atinadamente lo advirtió la parte recurrente. Circunstancia por la que no queda otro camino diferente a ordenar la revocatoria de la decisión que denegó la exhibición de las pruebas documentales y, en su lugar, deberá ordenarse su decreto, ante la pertinencia del medio probatorio, pues no puede perderse de vista que la información que puede contener dichos documentos guarda una relación directa con los supuestos fácticos de la responsabilidad civil que hoy se reclama.

3. INCORPORACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL: En línea con los argumentos que expuso el demandante para solicitar la incorporación de la historia clínica *“la respuesta de Cummini repara los antecedentes médicos de la demandante”*, por lo que consideró que debía acompañarse la historia clínica de la petente, bajo el pretexto de contradecir las afirmaciones de las demandadas, para lo cual bastará indicar que dicha afirmación no reviste la fuerza necesaria para ordenar la incorporación de un nuevo historial médico, cuando desde el momento de la presentación de la demanda ya obra una experticia médica que no se acusó de falsa o incompleta, por lo cual deviene innecesario que nuevamente se ordene su incorporación, motivo por el cual se mantendrá la decisión que al respecto invocó el Juez del Circuito.

4. PRUEBA POR INFORME: Iniciemos precisando que de la lectura del artículo 275 del Código General del Proceso, se desprende inconcusamente que dicho medio probatorio es necesario para obtener información sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, cuyo destinatario podrá ser las entidades públicas o privadas, o en su defecto cualquier persona. Para obtener su decreto, resulta importante establecer que previamente se hubiese agotado el derecho de petición, o en su defecto que se trate de documentos que en razón de su naturaleza no es susceptible de obtener dicha información mediante su ejercicio, para lo cual, será necesario acreditar el objeto por el que se pretende servir de esa prueba dentro del proceso judicial en curso o por iniciarse.

¹ Documentos que también se reitera en el Cuaderno Dos (Páginas 80-129), 003CuadernoTres (Pág27-59), Cuaderno 10 (pag285-317)

² Igualmente se advierte los documentos de informe de estudio de la calidad (001CopiaExpedienteFísico,pág599-613,700-714,), las visitas técnicas realizadas por Cummins de los Andes S.A en dicha anualidad(001CopiaExpedienteFísico,pág191-209),actividades realizadas en los ascensores Mitsubishi No 1 y 2 Edificio el Ciruelo (002CuadernoDos,pág65-66) Contrato Integral de Mantenimiento Preventivo de Ascensores Mitsubishi (002CuadernoDos,pág74-79) Informe Técnico-Actividades de Mantenimiento (003CuadernoTres, pag23-26).

4.1. Caso Concreto. Descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte por el Tribunal que la decisión que adoptó el juez en ese sentido resulta violatoria del derecho de prueba de la llamante en garantía, porque se anticipó a que la información que allí se pide -relación de las incapacidades que presentó la demandante- deberá ser suministrada por la Persona encargada de Gestión Humana de la Universidad Bolivariana como empleadora, información que si bien puede obtenerse al momento de la recepción del interrogatorio, lo cierto es que no hay certeza de que efectivamente tenga en su conocimiento todos los datos de las incapacidades, máxime cuando el motivo de su citación al proceso corresponde a la ratificación de un contrato laboral.

En tal sentido, como el apoderado de la llamada en garantía formuló derecho de petición en los términos del artículo 173 del C.G.P (004CuadernoCuatro334) y la prueba solicitada resulta pertinente, porque la petición que clama el recurrente tiene como finalidad –*conocer las incapacidades laborales que presentó la señora Luz Elena Arango desde marzo del 2009 hasta diciembre del 2011 y el origen de su causación*-, de cara al móvil del proceso se justifican en la pretensión indemnizatoria, lo que traduce la procedencia del medio probatorio y en tal sentido se dispondrá su decreto, limitándose únicamente al reporte de las incapacidades, pues el origen de su causación, obedece aspectos de conocimiento médico que por razones lógicas no es una información que pueda brindar el instituto académico.

5. DE LA PRUEBA TESTIMONIAL: Iniciemos precisando que de la lectura del artículo 212 del Código General del Proceso, se desprenden unos requisitos formales, taxativos y de obligatorio cumplimiento que deben cumplir las partes al momento de la solicitud de una prueba testimonial, requisitos que van dirigidos a identificar el órgano de la prueba, como los son el nombre, el domicilio, la residencia o el lugar donde pueden ser citados los testigos y, las demás exigencias van encaminadas a establecer la pertinencia, utilidad o conducencia de la prueba testimonial, de ahí que se exija la enunciación concreta de los hechos que son materia de la prueba.

Con todo lo anterior, el suscrito magistrado considera que no obstante poder hallarse huérfano el *petitum* probatorio de tales exigencias, sin embargo, tales falencias no pueden operar *ipso facto* para negar la prueba, porque ello podría llegar a cercenar el derecho de defensa, correspondiendo al Juez, en cada caso, mirar la viabilidad de

requerir a la parte solicitante para que subsane tales requisitos formales bajo el entendido del debido proceso y la igualdad procesal, previo a resolver sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del testimonio.

Como viene de verse, los primeros requisitos, en sí, se refieren a la persona del declarante sin ninguna calificación adicional y, los segundos, al hecho investigado, al margen del contenido intrínseco del testimonio. Es innegable, entonces, que la norma antes referida detenta pautas claras y precisas que sirven de base a los requisitos mínimos tendientes al decreto efectivo de una prueba testimonial y, evidentemente, uno de ellos está encaminado al hecho de que, si no se enuncia concretamente lo que será objeto de prueba, la prueba testimonial solicitada, entonces, deberá ser negada. Bajo este marco, para este Magistrado, conviene en primera medida al juzgador hacer un estudio sobre la conducencia de los testimonios solicitados, analizando su incidencia en la demostración de hechos susceptibles de ser declarados dentro del proceso de referencia.

5.1. Caso Concreto. Desciendo a esa labor, una vez analizado el argumento que expone la solicitud de la prueba testimonial (080ContestaciónDemandaCumminispag25), los argumentos que expone el recurrente se caen por su propio peso, pues, una vez analizado el acápite de la prueba testimonial, se observa que su petición no se acompasa con lo dispuesto en el artículo 212 del C.G.P, dado que no sustentó el motivo por el cual debe ser citado al proceso, ni tampoco cumplió con los requisitos formales de identificación del testigo -sólo se limitó a indicar el nombre de la persona y su ocupación en la Sociedad-, al tiempo que una vez se enteró de dichas falencias, trató de suplirlos mediante el recurso de reposición y en subsidio de apelación, lo que de cara al momento de la oportunidad probatoria resultan extemporáneos

II.CONCLUSIONES

Conforme a los argumentos previamente descritos, y ante la palmaria revocatoria parcial del auto objeto de apelación, porque la determinación adoptada por el Juez A quo acarrea una infracción irrestricta al derecho fundamental del debido proceso de algunos de los recurrentes, debe ahora el Tribunal acceder al decreto de los medios de convicción clamados, tal y como se expone a continuación:

1.Dictamen Pericial: Se permite la incorporación del Dictamen Pericial que en su momento acompañará la parte demandante, para contradecir la experticia técnica del señor Carlos Emilio Gutiérrez, para lo cual, el juez de primera instancia dará aplicación a lo previsto en el artículo 227 del C.G.P, esto es, delimitará el tiempo en que el recurrente puede acompañar el escrito contentivo de dicho medio probatorio.

En igual sentido, se ordena la incorporación del Dictamen Pericial presentado por la Aseguradora SBS SEGUROS S.A. obrante a folios 758 del Cuaderno Digital denominado *-(Cdo 001CopiaExpedienteFísico)-*, expedido por la Universidad CES a través del doctor José Jaime Acosta.

2. Exhibición de Documentos: Se ordena a la Sociedad Mitsubishi que exhiba los documentos: Manual de Operación de los Ascensores Instalados en la P.H El ciruelo, Informes o fichas de mantenimiento de los ascensores instalados en la P.H el Ciruelo correspondientes a los años 2008 y 2009, Copia de la información contenida en el registrador de datos (datalogger) del ascensor durante los años 2008, 2009 y 2010 y el documento contentivo del Registro del Ascensor al momento de su instalación (16.2 de la Reclamación Técnica UNE-EN 81-2:2001).

Por su parte, la Propiedad Horizontal El Ciruelo exhibirá las reclamaciones que en su momento los habitantes, usuarios y demás terceros relativos al funcionamiento de los ascensores ubicados en la Unidad, le hubiesen realizado durante los años 2008 y 2009.

3. Prueba por Informe: Se ordena a la Universidad Pontificia Bolivariana –Gestión Humana- que informe al Despacho, la cantidad de incapacidades laborales presentadas por la señora Luz Elena Arango Arias, identificada con cédula de ciudadanía No 32.515.071 desde marzo de 2009 a diciembre de 2011, para lo cual acompañará –en el caso que estuviere en su poder- las constancias de certificación médica que en su momento presentó la demandante.

Finalmente, atendiendo a los reclamos que en su momento formularon los recurrentes frente a los efectos en que se surtió el recurso de apelación, ante la existencia de la presente providencia, deviene inane su modificación. Sin embargo, dicha circunstancia no obsta para recordarle al Juez que tratándose de la apelación de autos el efecto en

que debe concederse es el Devolutivo, tal y como lo prevé el artículo 323 del C.G.P, esto es: “la apelación de los autos se otorgará en el efecto devolutivo, a menos que exista disposición en contrario”.

De esta manera y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Medellín***, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto que por vía de apelación se revisa proferido el día tres (03) de febrero del año en curso proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, por medio del cual se procedió al decreto de pruebas, para en su lugar, acceder a los medios de convicción descritos en el acápite de conclusiones previamente referenciado, atendiendo a los lineamientos que sobre el tema se advirtió en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO**

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **78595832b81b44d76cd5010ab849ff6e99fbf6ff9220171f95b5f15f6cb5566f**

Documento generado en 27/06/2023 01:43:46 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>